“INADMISIBILIDAD DE LAS DEFENSAS CAUSALES O EXTRACARTULARES EN LA ACCION EJECUTIVA CAMBIARIA”

Por el Dr. ADOLFO ALVARADO VELLOSO

Sabido es que las acciones emergentes de una letra de cambio, cuyo régimen legal se aplica supletoriamente al cheque, (art. 55 Dto. Ley 4776 y art. 836 Cód. Com., derogado por art. 2º, Dto. Ley citado) pueden ser extrajudiciales (resaca) o judiciales (por vía ordinaria y por vía ejecutiva). De estas últimas, la acción ejecutiva resulta procedente por virtud de la fuerza ejecutiva que le confiere a una letra debidamente protestada, el art. 60 del Dto. Ley 5965/63, con el cual se halla en consonancia el art. 442, inc. 3º del Código de Procedimientos Civiles (ley 5531).

Dicha norma es similar en este aspecto a la del art. 673 (derogado) del Código de Comercio, bajo cuya vigencia se originó el debate doctrinario que relataré y que tuvo como base el art. 676 (consecuencia lógica del ya citado) del mismo código, que textualmente decía: “contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, no se amittirá más excepción que la de **falsedad**, pago, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción o caducidad de la letra y espera o quita concedida por el demandante, que se pruebe por escritura pública o por documento privado, judicialmente reconocido. Cualquiera otra excepción, sea de la naturaleza que fuese, no obsta al progreso del juicio ejecutivo”.

En la interpretación de esta norma, tanto la doctrina como la jurisprudencia debaten desde antaño la posibilidad de discutir —en el proceso ejecutivo cambiario— la existencia o falta o la falsedad de la causa o relación fundamental determinante de la emisión de la cambial. Frente a esta cuestión, algunos tribunales locales interpretaron que, dentro de la economía general de la ley mercantil y a tenor de lo dispuesto en el art. 305 de la ley 2924, Código Procesal vigente hasta 1962 (que autorizaba en el juicio ejecutivo “todas las excepciones dilatorias o perentorias admisibles en juicio ordinario, a menos que se trate de letras de cambio, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio”) era posible discutir en el juicio ejecutivo la causa de la obligación cambiaria, cuando esa discusión se planteaba entre dos obligados inmediatos (doctrina extraída por interpretación a contrario sensu del artículo 212 y del 629, del Código de Comercio, hoy artículo 18, Decreto Ley 4776) es decir que a la luz de tal doctrina, se podía discutir la relación fundamental, por ejemplo,

cuando el portador iniciaba la acción directamente contra el girado aceptante, o contra su endosante inmediato o cuando éste, habiendo recuperado la letra, se dirigía contra su antecesor por la vía regresiva.

La base doctrinaria de esta corriente de opinión fincaba no sólo en el art. 212 ya citado del Código de Comercio, sino también en el art. 676 del mismo cuerpo legal, del que remarcaban que su fuente inmediata era el Código español de 1829, extrayéndose de ello que la doctrina española de la época admitía la posibilidad de oponer la excepción de falsedad sin distinguir entre sus aspectos intrínsecos y extrínsecos.

Con posterioridad a la vigencia del nuevo régimen cambiario —que no modificó el art. 212 Código Comercio— y, —esto es muy importante en nuestra provincia— a la del nuevo código de procedimiento (ley 5531, cuyo art. 475 reza textualmente: “En el juicio ejecutivo, sólo serán admisibles las excepciones siguientes: 1º) Las procesales legisladas en el art. 139. 2º) Falsedad material o inhabilidad de título, ambas referidas a lo puramente externo. 3º) Prescripción. 4º) Pago, quita, espera, remisión, novación, transacción o compromiso, documentados. 5º) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. Igualmente podrá alegarse en general la nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ella quedan establecidas”, esta interpretación se mantiene —al menos doctrinalmente— en el foro local (v. Fontanarrosa, “Aspectos partic. de la reforma cambiaria”, *Juris*, 24-289; Araya, Celestino, “Acciones y excepciones cambiarias”, *Juris*, 26, 387; el mismo autor, al igual que Blanco y Ricer, Fargosi, Malagarriga, Quintana Ferreyra, Bergel, Robbiolo y otros, en “Jornadas sobre letras de cambio, pagarés y cheques”, Córdoba, mayo 1965, ed. U.N., Córdoba 1967) con fundamento en los arts. 18 a (contrario), 11 (también a contrario), 19 (id.), 20 (id.) y 22 (id.), de donde se afirma, siempre a contrario sensu, que la ley mercantil se refiere a los casos en los que no puede oponerse excepciones, lo que indica que es factible la defensa causal entre obligados directos, pues a los mismos no se refiere expresamente la ley en ninguna de sus normas.

Además de todo lo expuesto, los comercialistas sostenedores de esta tesis se remiten a la ley uniforme de Ginebra de 1930 —que nada quita

ni pone al problema, por cuanto los arts. 18, 19, 20 y 22 de nuestra actual legislación encuentran sus símiles perfectos en los arts. 17, 18, 19 de dicho ordenamiento — sino también a la ley italiana del 14 de diciembre de 1933, olvidando que en esta legislación las normas procedimentales varían fundamentalmente, pues la paralización de la ejecución en caso de oposición de amplia investigación por parte del deudor, se produce sólo por auto judicial fundado que lleva anexa la imposición de una caución idónea al oponente (ver arts. 64, 65 ley cit., similares a los arts. 56 y 57 de la ley de Cheques del 21 de diciembre de 1933; Cfr. Messineo "Manual de Derecho Civil y Comercial", Bs. As. 1956, T. IV p. 26 y ss., VI, p. 360 y VIII, pág. 136 y 151).

En contraposición de esta doctrina, una abundante mayoría de fallos de tribunales provinciales — por citar sólo los locales — se inclinó por la tesis de que en la ejecución cambiaria no resultaban admisibles las excepciones o defensas fundadas en la causa de la obligación cambiaria (Cfr. C.A. Rosario, Sala 1ª: "Cicutti c/Vázquez (mayoría)", 25-11-47, J.T.S.F., 26-611; "Saisi c/Parisi", 30-12-52, Juris, 2-315; "García c/García", 4-10-55, J. 8-175; "Esplugas c/Nardi (referido concretamente al cheque) 17-9-57 J. 13-193; "Barrera Hnos. c/Asociación Productores de Río Negro" 28-11-57, J.A., 1960, I-8; "Budman c/Fabio", 17-12-59, J.A., 1960-V-213; "Pagiola c/Arnoldo", 16-5-61, L.L., 103-202; "Rivosecchi Hnos. c/Rumié" 23-5-61 J. 19-87 y L.L. 103-215; Idem, Sala 2ª: "Bevilacqua c/Comba", 25-7-50, J.T.S.F., 29-105; "Cardoso c/Puig", 10-10-52, J. 2-17 y "Barbison c/Cartotécnica" (análoga) 24-4-53 J. 2-431; Idem, Sala 3ª: "Gunnar c/Brun de Frey", R.S.F. 14-288; "Escudero c/Burry" (disidencia del Dr. Navarro), 29-7-47, R.S.F., 17-10; "Casabella c/Casabella", 13-7-56, J. 9-58; "Maguid de Dorffman c/Schilman" 23-10-56 J. 10-291; "Giustina c/Arnoldi", (por mayoría), 4-9-56, J.A. 1957-III- 516; y S.T.S.F., Sala 1ª: "Casabella c/Aidardi", 23-12-58 J. 15-83; "Aguilera c/Zabusky", 9-10-56, J. 10-162; Sala 2ª: "Allasia c/Colletti", 25-10-57, J. 12-117; "Roldos c/Massaró", 19-9-58, J. 13-269; "La Caravana c/Colletti", 31-10-52 J. 1-586).

Con posterioridad, no sólo a la reforma cambiaria operada a través del Dto. Ley 4776, sino también a la reforma del Código de Procedimientos, donde se modificó sustancialmente el régimen de excepciones que contenía el ya citado art. 305 de la ley 2924 (recordar el art. 475, ley 5531, ya copiado) prevaleció esta opinión mayoritaria a que vengo aludiendo, (Cfr. C.A.R., S. 1a. "Briñón c/Albanesi S.R.L." 29-4-64, L.L. 116-347 y "Marchica c/Stoisa", 12-5-64, L.L., 116-751; S. 3ª:

"López de Vita c/Cinabá", 23-4-63, J. 27-93; S. T.S.F., Sala 1ª, "Acosta c/Greca", 27-12-63, J. 26-159; "Neumann c/Muchiutti" 6-8-64, J. 28-162, etc.).

Esta tesis, correcta a mi juicio, encuentra fundamento doctrinario — tanto en el régimen anterior como en el actual — en "la índole puramente formal y externa de las cuestiones que están permitidas respecto del título que sirve de base a un procedimiento ejecutivo de este tipo (Couture, "Fundamentos..." Bs. As. 1958 p. 451; Carmelutti, "Título Ejecutivo: título ejecutivo y ciencia del proceso", en Estudios, I, Bs. As. 1952, págs. 656 y ss.; Liebman: "Sobre el juicio ejecutivo" en "Estudios en honor de Hugo Alsina" p. 385 y ss.)" (C.C. y C.S.F., S. 1ª, 27-12-63, J. 26-159), "cuyo origen y finalidad apartan la posibilidad lógica de considerar objeciones que no hagan al documento mismo en su materialidad" (J. 13-269).

Rosas Lichtschein, quien evidencia en numerosísimos fallos publicados en Juris — y con justa razón — pretender reivindicar para la ciencia procesal toda la temática relativa a acciones y excepciones cambiarias, dice in re "M. de Acosta e Hijos c/Greca" (Juris 26-159): "Fernández (Cód. de Com. Com. III, Bs. As. 1950) sostiene que ha de tomarse en consideración nada más que las formas exteriores del papel (p. 300) y — en su nota que publicó la ley, t. 12 — fustiga la interpretación que no repara en la índole sumarísima del juicio ejecutivo, raíz de la cual se ha previsto uno ordinario posterior en los ordenamientos procesales (p. 569). Ciertamente que este olvido resulta grave para una correcta inteligencia del art. 676 del Código de Comercio. El 212 no tiene más finalidad que la de sancionar un principio por demás conocido en el terreno de las obligaciones endosables: el derecho del tercer portador es independiente de la relación jurídica en virtud de la que el título se emitió (Malagarriga, "Cód. de Com. Comentado", Bs. As. 1927, I, p. 420); principio no sólo propio de las letras y pagarés, sino de cualquier obligación transmisible por endoso (Rivarola "Tratado..." Bs. As. 1939, III, p. 17). De suerte que al decirse que la falta de o la falsa causa nunca podrá oponerse al tercer portador de buena fe, no se quiere expresar que siempre podrán esgrimirse contra el tomador sino, simplemente, y teniendo en cuenta la naturaleza y el fin del proceso ejecutivo (emergente — además — de las reglas generales propias de la institución, ver "Explicación a la reforma procesal Santafesina", Santa Fe, 1962, p. 201 y ss.) que al tercero de buena fe ni en juicio ordinario ni en el ejecutivo se le podrá discutir la causa, en tanto que al to-

mador sí, en el ordinario" (En las Jornadas sobre letras de cambio, pagarés y cheques antes mencionadas, propiciaron esta tesis —entre otros— Alegría (p. 26 y 283), Vanasco (p. 302) y Casiello (p. 304, todas de la obra citada).

En consecuencia, si el tomador de la letra opta por la vía ordinaria para su cobro, puede el librador discutirle la causa de la misma, mas no puede hacerlo respecto del tercero de buena fe que intenta la acción.

En cambio, si el tomador o el tercero tenedor optan por la vía ejecutiva, no podrá el obligado —en ningún caso— discutir la causa de la obligación, no obstante la posibilidad de hacerlo posteriormente, por vía ordinaria, sólo contra el tomador.

Por todo ello, propongo que las Primeras Jornadas de Derecho Procesal

DECLAREN:

"En juicio ejecutivo intentado a base de un documento cambiario, no resulta admisible la excepción que, fundada en la relación extracartular, es opuesta contra el tomador de la cambial o contra el tercero de buena fe - tenedor de ella".

Dr. ADOLFO ALVARADO VELLOSO